



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

EXPEDIENTE: 613/13-02-01-2

PARTE ACTORA:

***** **

AUTORIDAD DEMANDADA:
SUBDELEGADO DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE
GUAYMAS, SONORA.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
MIGUEL ALFONSO DELGADO CRUZ.

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MANUEL BARRIENTOS MARTÍNEZ

MATERIA:
LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Ciudad Obregón, Sonora, **a veintiuno de abril del año dos mil catorce.**- Vistas las constancias de autos y estando debidamente integrada la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los Magistrados **LÁZARO FIGUEROA RUIZ**, en su calidad de Presidente de la Sala, **CARLOS MIGUEL MORENO ENCINAS**, y **JUAN CARLOS ENCINAS VALDÉZ**, Magistrado por Ministerio de Ley, actuando en suplencia por ausencia del Magistrado **MIGUEL ALFONSO DELGADO CRUZ**, Instructor del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 32 fracciones II y IV del Reglamento Interior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se procede a emitir la sentencia definitiva en los términos siguientes:

R E S U L T A N D O:

1º.- Por escrito y anexos presentados directamente en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el día trece de mayo de dos mil trece, *****

2.-

***** ***** ******, en su carácter de apoderado legal de la ***** *****
*** **** ***** ** ******, ocurrió a demandar la nulidad de la resolución
contenida en el oficio número ******, de fecha 18 de febrero de 2013, a través
del cual el Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro
Social, de Guaymas, le negó la devolución de las cuotas obrero patronales
correspondientes a los periodos de enero a diciembre de 2008, solicitada en
cantidad total de \$404,950.90, (CUATROCIENTOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 90/100 M. N.).

2º.- Por acuerdo de **catorce de mayo de dos mil trece**, se
admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose que con las copias
simples exhibidas se corriera traslado a las autoridades demandadas para
que produjeran su contestación respectiva, lo que aconteció mediante oficio
recibido en la Oficialía de Partes de esta sala el día trece de agosto de dos
mil trece.

3º.- Mediante auto de **quince de agosto de dos mil trece**,
se tuvo por contestada la demanda, y por virtud de la manifestación de la
demandada, se requirió a la parte actora a efecto de que proporcionara el
nombre y domicilio del representante de sus trabajadores o en su caso del
Sindicato al que éstos se encontraran afiliados, quienes tendrían el carácter
de terceros interesados, lo que se cumplimentó mediante escrito recibido en
la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el día dos de septiembre de dos
mil trece

4º.- Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil trece, se
ordenó emplazar a los terceros interesados, sin que a la fecha hubieren dado
contestación a la demanda, por lo que mediante proveído de veinticuatro de
enero de dos mil catorce, se tuvo por precluído el derecho de los terceros para



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

EXPEDIENTE: 613/13-02-01-2

3.-

comparecer al juicio; asimismo, se concedió a las partes contendientes el término de ley para que formularan sus alegatos por escrito, sin que ninguna de ellas hubiere ejercido ese derecho.

5º.- Mediante proveído dictado en esta misma fecha se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dispone en términos generales que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante; y 21, fracción II, y 22, fracción II, del Reglamento Interior de este mismo Tribunal, a través de los cuales se determinan los límites territoriales, denominaciones, números y sedes de sus salas; al tener su domicilio el demandante dentro de la jurisdicción de esta de esta Sala Regional del Noroeste II, se determina que la misma resulta competente para conocer sobre el presente juicio.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada quedó debidamente acreditada en autos, con el reconocimiento expreso que de la misma hacen las partes y con los ejemplares donde consta su existencia y que como prueba exhibió la enjuiciante, de conformidad con lo

4.-

dispuesto por los artículos 93 fracciones I y II, 95, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el juicio fiscal.

TERCERO.- Por cuestión de método, esta Sala abordará en primer orden el concepto de impugnación identificado como TERCERO, en el que la actora hace valer cuestiones relacionadas con la competencia de la autoridad demandada.

En éste refiere que la resolución impugnada es ilegal y le causa perjuicio, ya que no se funda conforme a derecho, y que en consecuencia se actualizan las causales de anulación contenidas en los artículos 51, fracción II, y 52, fracciones III y IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señalando que por lo tanto se debe declarar nula para efecto de que se le autorice lo solicitado en devolución, ya que la demanda no justificó su competencia material y territorial, así como por grado, conforme al artículo 16 constitucional.

La autoridad demandada fue omisa en dar contestación al citado agravio.

A juicio de los suscritos Magistrados que integran esta Sala Regional del Noroeste II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el argumento en estudio resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, por los motivos y para los efectos que se precisan a continuación:

En este punto, es de señalar que el análisis de la competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, constituye una cuestión de estudio preferente, que incluso puede ser analizada de manera oficiosa por ésta Sala, y además constituye una cuestión de orden público, irrenunciable e improrrogable, con independencia al hecho de que



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

EXPEDIENTE: 613/13-02-01-2

5.-

el gobernado se hubiere sometido a la potestad de la autoridad; situación que es acorde con el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis que se cita a continuación:

“COMPETENCIA. EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ES IMPRORROGABLE Y, POR TANTO, NO EXISTE SUMISIÓN TÁCITA DEL GOBERNADO.

La competencia en materia administrativa puede definirse como el complejo de facultades, obligaciones y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo; así, las normas que establecen la competencia son de orden público, pues éstas se forman con miras al interés público, no al del órgano estatal, por lo que aquélla es irrenunciable e improrrogable, tanto por acuerdo entre las partes, como de ellas con la administración; esto inclusive para la competencia territorial, a diferencia de lo que ocurre en el derecho procesal. Luego, el hecho de que el gobernado -con el fin de evitarse conflictos con la administración pública- intente cumplir lo que le es requerido por un ente estatal sin controvertir su competencia, de ninguna manera legítima la actuación de una autoridad incompetente, ya que, se reitera, la competencia en el ámbito administrativo es improrrogable. Además, en caso de que se estimara prorrogable por sumisión tácita, se obligaría a los particulares a mostrarse insumisos a los mandamientos de las autoridades que estimaran incompetentes (o que no fundaran adecuadamente su competencia), con la posibilidad de que se aplique en su contra algún tipo de coacción que pudiera derivar en actos de molestia o privación; se suma a lo anterior, el hecho de que el fundamento de la competencia de las autoridades constituye un elemento esencial del acto de autoridad, cuyo cumplimiento puede ser impugnado por los particulares en el momento en que les produzca algún agravio jurídico, tan es así que el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, impone al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que analice de oficio si la autoridad administrativa carece o no de competencia legal para emitir el acto impugnado o alguno de los que le sirven de antecedente o apoyo; por lo que en el caso de que se aceptara la sumisión tácita del particular a la competencia de la autoridad, se llegaría al absurdo de convalidar actos viciados en su origen por provenir de autoridades incompetentes.

Novena Época Registro: 175658 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: XV.4o.18 A Página: 1961

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 59/2005. Administrador Local Jurídico de Mexicali. 24 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Juan Manuel Serratos García.

Notas:

6.-

Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1783, se publica nuevamente con la modificación en el texto que el propio tribunal ordena.

Por ejecutoria del 1 de febrero de 2012, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 362/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva."

A fin de dilucidar la litis planteada en el presente juicio, es preciso observar los fundamentos expuestos en la resolución impugnada, mismos que se reproducen a continuación:

Esta Subdelegación Guaymas, órgano operativo de la Delegación Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de organismo fiscal autónomo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 3, primer párrafo, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente; 5 y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales vigente; 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 37, 39, 222 a 226, 230, 231 fracción I, 251 fracción IV, X, XXXVII, 299, artículo vigésimo transitorio 1997 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, de la Ley del Seguro Social; 1 fracción II, 57, 75 fracción II, 77, 79, 88 fracción II, 90 a 92, 111, 131, 132, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 73 Fracción I inciso f), 149, 150 fracciones III, XVIII, XXVI, XXVIII, 152, 153, 155 fracción XXVI inciso d), 159, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; 18, 18-A, 22, 34 del Código Fiscal de la Federación, acuerdos 2-612/86 del 17 de Septiembre de 1986, 240/92 del 17 de junio de 1992; 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en vigor; se analiza los motivos y documentación presentada.

De la reproducción anterior, se advierte con meridiana claridad que la Subdelegación en Guaymas, del Instituto demandado, citó como parte de su fundamento los siguientes preceptos legales y reglamentarios:

Ley del Seguro Social



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

EXPEDIENTE: 613/13-02-01-2

7.-

“Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

...

IV. En general, realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus fines, así como aquéllos que fueren necesarios para la administración de las finanzas institucionales;

...

X. Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, inscribir a los trabajadores asalariados y precisar su base de cotización aun sin previa gestión de los interesados y a los trabajadores independientes a su solicitud, sin que ello libere a los obligados de las responsabilidades y sanciones por infracciones en que hubiesen incurrido;

...

XXXVII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y cualesquiera otra disposición aplicable.”

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

“Artículo 150. Son atribuciones de las subdelegaciones, dentro de su circunscripción territorial:

...

III.- Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, clasificar a los patrones de acuerdo con su actividad y determinar la prima del seguro de riesgos de trabajo, así como inscribir a los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento y precisar su base de cotización;

...

XVIII.- Aplicar las políticas, criterios, normas, metodologías y programas, según corresponda, establecidos por las unidades administrativas competentes, de conformidad con lo previsto en los artículos 72, fracción I, 73, fracción I, y 74, fracción II, de este Reglamento;

...

XXVI.- Autorizar la renovación extemporánea del aseguramiento en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio y el seguro de salud para la familia, dentro de los plazos que establece el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización;

...

XXVIII.- Las demás que señalan la Ley, sus reglamentos, y demás disposiciones aplicables.”

“Artículo 155. Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para Cobros del Instituto ejercerán las facultades que les confieren la Ley, sus reglamentos, y los acuerdos del Consejo Técnico, dentro de la circunscripción territorial siguiente:

...

XXVI. Delegación Estatal Sonora.

8.-

Jurisdicción: Estado de Sonora, excepto el Municipio de San Luis Río Colorado.

...

d) Subdelegación y Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social: Guaymas.

Jurisdicción: Los Municipios de Empalme y Guaymas.”

De los preceptos legal y reglamentarios recién reproducidos, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones, de realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus fines, así como aquéllos que fueren necesarios para la administración de las finanzas institucionales, así como de registrar a los patrones y demás sujetos obligados, como de inscribir a los trabajadores asalariados y precisar su base de cotización aun sin previa gestión de los interesados, también, las subdelegaciones del referido Instituto, resultan competentes para Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, clasificar a los patrones de acuerdo con su actividad y determinar la prima del seguro de riesgos de trabajo, así como inscribir a los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento y precisar su base de cotización; aplicar las políticas, criterios, normas, metodologías y programas, según corresponda, establecidos por las unidades administrativas competentes, de conformidad con lo previsto en los artículos 72, fracción I, 73, fracción I, y 74, fracción II, del propio Reglamento; y autorizar la renovación extemporánea del aseguramiento en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio y el seguro de salud para la familia, dentro de los plazos que establece el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Asimismo, en cuanto a la competencia por razón de territorio, la demandada citó el artículo 155 fracción XXVI, inciso d), que la faculta para actuar en los Municipios de Guaymas y Empalme, en el Estado de Sonora.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

EXPEDIENTE: 613/13-02-01-2

9.-

En esa tesitura, a juicio de esta Juzgadora, resulta fundado el argumento esgrimido por la demandante, en tanto que, si bien la autoridad justificó su competencia por razón de territorio, fue omisa en justificar su competencia material, ya que en la especie no justificó su competencia para resolver la solicitud de devolución de las cuotas obrero patronales efectuadas por la *****.

En efecto, de la lectura a los preceptos legal y reglamentario transcritos, no se advierte que la Subdelegación de Guaymas del Instituto Mexicano del Seguro Social cuente con facultades para resolver la solicitud de devolución de las cuotas obrero patronales efectuada por la demandante, dado que los preceptos que citó en su resolución no le confieren tal potestad, dado que dichas disposiciones hacen referencia a facultades de comprobación, vigilancia, y registro de los sujetos de aseguramiento, entre otras, pero de ninguna manera facultan a dicha unidad administrativa para resolver las solicitudes de devolución de cuotas obrero patronales presentadas por los patrones-contribuyentes.

En esa tesitura el pronunciamiento emitido por la Subdelegación de Guaymas del Instituto Mexicano del Seguro Social, carece de validez, **al no tener dicha unidad administrativa competencia para resolver la solicitud de devolución de cuotas obrero patronales promovida por el enjuiciante, o por lo menos no lo justificó así en su resolución**, resultando ilegal tal pronunciamiento, por lo que en la especie lo procedente es declarar la nulidad de dicha resolución, y toda vez que en el caso dicha resolución derivó de una instancia presentada por el enjuiciante, en el caso deberán imprimirse efectos a tal determinación, ello de conformidad con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se cita a continuación:

10.-

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.

Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Novena Época Registro: 188431 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Noviembre de 2001 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 52/2001 Página: 32

Contradicción de tesis 92/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

Tesis de jurisprudencia 52/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil uno.”

Asimismo, apoya lo anterior, el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación que señala:

“NULIDAD POR INCOMPETENCIA. DEBE DECRETARSE PARA EFECTOS CUANDO EL ACTO IMPUGNADO EMANA DE UN PROCEDIMIENTO EN EL CUAL EXISTE OBLIGACIÓN LEGAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA LITIS QUE LE FUE PLANTEADA.

El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la garantía de acceso a la justicia, que consiste en la facultad que tienen los particulares para



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

EXPEDIENTE: 613/13-02-01-2

11.-

acudir ante el Estado a fin de someter a su consideración una pretensión o litigio, y la obligación ineludible de la autoridad, una vez seguidas las formalidades esenciales del procedimiento, de poner fin a la contienda mediante el dictado de una resolución, la cual debe ejecutarse materialmente. Por tanto, si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estima que la autoridad demandada era incompetente para sustanciar y resolver un procedimiento que le fue planteado por un particular, debe verificar si existe obligación legal de emitir una resolución administrativa y, en caso afirmativo, la nulidad deberá ser para efectos, no lisa y llana, en términos de lo dispuesto por el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ordenando la reposición de todo lo actuado en el procedimiento natural, para que éste sea remitido a la autoridad que debió conocer el asunto, pues de lo contrario se priva al gobernado de su derecho de acudir ante las instancias materialmente jurisdiccionales. Por ejemplo, si un particular acude ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a solicitar la caducidad o nulidad de una marca registrada a favor de otro gobernado, éste a su vez reconviene al actor respecto de marcas de su propiedad, y la Sala Fiscal, al conocer del juicio contencioso administrativo en contra de la resolución administrativa, declara la nulidad lisa y llana con motivo de la incompetencia de la autoridad que tramitó y resolvió la solicitud de infracción, tal situación es violatoria de garantías, pues con motivo del acto reclamado se priva al quejoso de su derecho de acceso a la justicia, al no existir pronunciamiento alguno sobre la pretensión que planteó ante el Estado.

Novena Época Registro: 180568 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.321 A Página: 1820

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2757/2004. Ricardo Rodríguez Cantú. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.”

En ese contexto, y en aras de preservar el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no dejar en estado de indefensión a la enjuiciante, y se le dé respuesta plena a su solicitud por la autoridad competente para ello, **lo procedente en la especie es declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada Subdelegación de Guaymas del Instituto Mexicano del Seguro Social funde debidamente su competencia para resolver la**

12.-

solicitud de devolución de cuotas obrero patronales presentada por la ***** ***, y en el caso de que considere que carece de dicha atribución, la remita a la unidad administrativa del referido Instituto, que resulte competente para ello, notificando dicha determinación al interesado, en el entendido de que la autoridad materialmente competente deberá emitir la resolución de fondo correspondiente de manera fundada y motivada.

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50, 51 fracción I, y 52, fracción III, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala;

R E S U E L V E:

I.- La parte actora **probó su acción**, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, por los motivos y para los efectos precisados en la parte final de la presente resolución.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD.

Así lo resolvieron y firman, los Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Secretario de Acuerdos Licenciado **Manuel Barrientos Martínez**, quien da fe.

MBM/apfv*

MAG. LÁZARO FIGUEROA RUIZ.

Titular de la Primera Ponencia y Presidente de la Sala.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

EXPEDIENTE: 613/13-02-01-2

13.-

LIC. JUAN CARLOS ENCINAS VALDÉZ.

Magistrado por Ministerio de Ley, actuando en suplencia por ausencia del Magistrado MIGUEL ALFONSO DELGADO CRUZ, Titular de la Segunda Ponencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

MAG. CARLOS MIGUEL MORENO ENCINAS

Titular de la Tercera Ponencia.

MANUEL BARRIENTOS MARTÍNEZ.

Secretario de Acuerdos.

“El día cuatro e de noviembre de dos mil veinticuatro, la Licenciada Ana Paola Flores Vera, Secretaria de acuerdos con adscripción en la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, por tratarse de nombre de persona moral, nombre de representante legal y datos relativos a la resolución impugnada. Conste.”